



## Consejo de Seguridad

Distr. general  
28 de abril de 2003  
Español  
Original: inglés

---

### **Carta de fecha 15 de abril de 2003 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo**

Tengo el honor de dirigirme a usted en relación con mi carta de fecha 4 de octubre de 2002 (S/2002/1164).

El Comité contra el Terrorismo ha recibido el informe suplementario adjunto de la República de Zimbabwe, presentado con arreglo al párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) (véase el anexo).

Le agradecería que dispusiera que el texto de la presente carta y de su anexo se distribuyera como documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Inocencio F. **Arias**  
Presidente

Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud  
de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo



## **Anexo**

### **Nota verbal de fecha 31 de marzo de 2003 dirigida al Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo por la Misión Permanente de Zimbabwe ante las Naciones Unidas**

La Misión Permanente de Zimbabwe ante las Naciones Unidas saluda atentamente al Presidente del Comité del Consejo de Seguridad contra el Terrorismo y tiene el honor de presentar el segundo informe de Zimbabwe en respuesta a las cuestiones planteadas por el Comité.

Zimbabwe está preparando actualmente una lista de recursos que nos permitirán patrullar nuestras fronteras de forma más eficaz, y está examinando otras cuestiones planteadas en la última parte del cuestionario del Comité contra el Terrorismo.

## Apéndice

### Informe de Zimbabwe al Comité del Consejo de Seguridad contra el Terrorismo

#### Párrafo 1

Zimbabwe todavía no es Estado parte en el Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo. Actualmente se están tomando las medidas necesarias para llegar a ser parte en ese Convenio, así como en el Convenio internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas y en la Convención de la OUA para prevenir y combatir el terrorismo. Con respecto a estos dos últimos tratados, se están preparando los instrumentos de ratificación, mientras que el primero tiene todavía que ser sometido al Parlamento para su aprobación. Zimbabwe, como aún no es parte en esos tratados, no tiene todavía disposiciones legislativas específicas relativas a la lucha, prevención y represión de la financiación del terrorismo. Esto no significa que como país condonemos el terrorismo. De hecho, aunque hemos derogado la Ley de mantenimiento del orden público, que databa de la época colonial, hemos incluido las mismas disposiciones contra el terrorismo en la Ley de orden público y seguridad. Algunas de nuestras disposiciones legislativas se ajustan sustancialmente a lo dispuesto tanto en la resolución 1373 de 2001 como en el Convenio para la represión de la financiación del terrorismo, aunque no en el plano internacional. La Ley de mantenimiento del orden público aborda ciertos aspectos del terrorismo, mientras que la Ley de delitos graves (confiscación de beneficios), si bien no hace referencia expresa al terrorismo, dispone la manera de hacerle frente y la confiscación de los ingresos procedentes del delito. Se adjunta copia de esa Ley para mayor facilidad de consulta. Zimbabwe una vez que sea parte en el Convenio, incorporará éste en su ordenamiento interno promulgando disposiciones legislativas para su aplicación y adoptando medidas de ejecución y vigilancia.

En Zimbabwe la ley no exige que se registren las organizaciones religiosas o culturales, por lo que, si estas no se registran como organizaciones benéficas, no es posible vigilar sus actividades ni supervisar sus finanzas. No obstante, se están examinando las prescripciones aplicables en materia de registro y vigilancia a las organizaciones privadas benéficas, que actualmente están sometidas a la vigilancia de la autoridad encargada del registro, pero que hasta ahora no habían sido vigiladas sistemáticamente.

Por el momento, a los delitos mencionados más arriba se les puede aplicar las disposiciones siguientes:

- Ley de delitos graves (confiscación de beneficios) (capítulo 9:17) - partes II, III y V; Ley de asuntos penales (asistencia mutua) (capítulo 9:06) – partes III y V;
- Disposiciones del *common law* relativas al delito de obstrucción de la justicia.

#### Párrafo 2 a)

En Zimbabwe, la adquisición y posesión de armas de fuego se rige por la Ley de armas de fuego (capítulo 10:09) y la Ley de orden público y seguridad (capítulo 10:09). Es delito poseer un arma de fuego, peligrosas armas o explosivos sin tener autorización legal. El transporte de armas de fuego o de artillería de cualquier tipo por vía aérea es delito según la Ley de delitos cometidos a bordo de aeronaves, y su transporte por carretera está prohibido por la Ley del transporte por carretera

(capítulo 13:11) y la Ley del transporte por carretera en vehículos motorizados (capítulo 10:09). No obstante, para luchar contra el transporte por carretera de artículos relacionados con el terrorismo, es preciso modificar esas dos leyes para permitir que la policía que instala barreras en las carreteras inspeccione los artículos que se encuentran en los vehículos. Como Estado miembro de la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC), Zimbabwe también es parte en el Protocolo relativo a las armas de fuego. El país pronto albergará la sede del Instituto Regional de Capacitación y Vigilancia en materia de terrorismo.

La legislación pertinente en este ámbito incluye:

- La ley de orden público y seguridad (capítulo 111:17) - Parte II
- La ley de armas de fuego (capítulo 10:09)
- La ley de explosivos (capítulo 10:08);

b) Zimbabwe tiene relaciones de cooperación con otros Estados de la SADC, por lo que, como miembro de la Organización Regional de Cooperación de Jefes de Policía del África Meridional (SARPCCO) y Estado miembro de la Interpol, participará en los intercambios de información sobre actividades terroristas. El Protocolo relativo a la defensa y seguridad, de la SADC, en el que Zimbabwe es parte, prevé la comunicación entre los Estados en caso de amenaza de actividades terroristas. Actualmente, Zimbabwe tiene dificultades para detectar eficazmente actos de terrorismo y necesita promulgar una legislación amplia y apropiada y fortalecer tanto los mecanismos administrativos para afrontar los casos de terrorismo como la comunicación con otros Estados.

c) Zimbabwe es parte en el Convenio de Ginebra de 1951 sobre la situación de los refugiados, en el Protocolo de 1967 sobre la situación de los refugiados y en el Convenio africano de 1969 sobre los aspectos específicos de los problemas de los refugiados en África. El otorgamiento de la condición de refugiado es de la competencia del Comisionado para los Refugiados, quien toma su decisión tras realizar una serie de investigaciones sobre la situación del solicitante. Se investiga su trayectoria de inmigración y se establece contacto con la Interpol, y cualquier persona que haya cometido un delito contra la paz, un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad, como se definen en cualquier instrumento en el que sea parte Zimbabwe, o que haya violado cualquiera de los principios de las Naciones Unidas, no será, entre otras cosas, reconocida como refugiado. Por lo tanto, las personas que hayan perpetrado delitos de terrorismo o hayan actuado como cómplices o encubridores en ese tipo de delitos no son reconocidas como refugiados en Zimbabwe.

d) Zimbabwe no tiene disposiciones legislativas específicas en esta esfera, puesto que todavía no es parte en el Convenio. Lo mismo se puede decir sobre la utilización del territorio de Zimbabwe para preparar actividades terroristas en otro país. No obstante, como se indica más arriba, el Convenio ha sido sometido al Parlamento de Zimbabwe para su ratificación, que es requisito previo para proceder a su aplicación y luchar eficazmente contra el problema del terrorismo.

e) Si bien Zimbabwe todavía no es Estado parte en el Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo, el Gobierno ha analizado la legislación interna para determinar en qué medida se ajusta a lo dispuesto en el Convenio y ha comprobado que Zimbabwe cuenta con la legislación necesaria para aplicar ciertas disposiciones del Convenio, asegurar que los tribunales del país son

competentes para juzgar a las personas que hayan perpetrado actos de terrorismo y cooperar y prestar apoyo a otros Estados partes y a las organizaciones internacionales y regionales pertinentes, en particular en lo que respecta al apartado e) del párrafo 2 de la resolución. Una vez que Zimbabwe sea parte en ese instrumento, tal vez sea necesario modificar la actual Ley de delitos graves (confiscación de beneficios) (artículo 9:17) para que abarque el aspecto específico de la financiación del terrorismo en relación tanto con los delitos graves en general como con delitos específicos. Del mismo modo, habrá que reforzar ciertas partes de la Ley de orden público y seguridad (artículo 11:17) que se refieren a diversos aspectos de la insurgencia, el bandidaje, el sabotaje y el terrorismo en el plano interno, tipificando como delito la financiación del terrorismo, lo que ampliaría el ámbito de aplicación de la Ley. Otra posibilidad consistiría en aprobar disposiciones legislativas específicamente encaminadas a incorporar las disposiciones de los convenios, lo cual requiere más tiempo que modificar la legislación vigente.

En cuanto a la jurisdicción de los tribunales de Zimbabwe en lo que respecta a:

- i) Actos cometidos fuera de Zimbabwe por un ciudadano de Zimbabwe o residente en Zimbabwe; si la persona se encuentra en Zimbabwe, se le aplica lo dispuesto en la Ley de extradición (capítulo 9:08), la Ley de asistencia mutua en asuntos penales (capítulo 9:06), la Ley de prevención de la corrupción (capítulo 9:16) o la Ley de delitos graves (confiscación de beneficios). La jurisdicción se extiende a los ciudadanos extranjeros que cometan delitos fuera de Zimbabwe y se trasladen después a Zimbabwe, pero, a petición del país interesado, según lo dispuesto en la Ley de extradición o la Ley de asistencia mutua en asuntos penales (capítulo 9:06), la persona ha de ser repatriada al país en el que deba ser juzgada. Además, Zimbabwe puede prestar ayuda a otros países para la obtención de pruebas dentro de Zimbabwe.
- f) Zimbabwe es parte en el Protocolo de asistencia jurídica mutua de la SADC, el acuerdo sobre asistencia mutua en asuntos penales y el plan de asistencia mutua del Commonwealth aprobado en Harare.
- g) Los siguientes organismos cooperan entre sí: Policía de la República de Zimbabwe, Fuerzas de Defensa, Servicio de inmigración, Parques Nacionales, etc. Se capacita al personal tanto del sector público como del privado, en particular a los miembros de la Fuerza de Policía, del sector bancario y de otros interesados, tales como el Servicio de inmigración. Además de las patrullas conjuntas dirigidas por miembros de la Policía de la República de Zimbabwe y de las Fuerzas de Defensa, existen puestos fronterizos plenamente equipados y en los que prestan servicio profesionales.

### **Párrafos 3 a), b) y c)**

La SARPPCO y la Interpol son las instituciones con las que actualmente se intercambia información sobre la delincuencia en general, y las mismas estructuras pueden utilizarse para el intercambio de información sobre el terrorismo.

- c) La extradición se rige por la Ley de extradición (capítulo 9:08), que establece el procedimiento de extradición entre Zimbabwe y otros países con los que Zimbabwe tiene acuerdos de extradición o relaciones de reciprocidad en materia de extradición. La extradición de una persona se realiza previa petición hecha al Ministro del Interior de Zimbabwe por un país con el que se haya firmado un acuerdo,

o con el que existan relaciones de reciprocidad. Si la persona cuya extradición se solicita es ciudadana de Zimbabwe, la petición de extradición debe presentar indicios suficientes de que, según el derecho de Zimbabwe, esa persona ha cometido un delito o ha sido declarada convicta de un delito por el país que solicite la extradición. El Gobierno, a petición del país interesado y previa justificación suficiente, puede ordenar la detención provisional de la persona buscada, que deberá comparecer ante la justicia para que se pueda determinar si se aprueba su extradición. El delito por el cual se pide la extradición debe estar comprendido en el acuerdo que hayan suscrito Zimbabwe y el país correspondiente, o debe estar tipificado en la Ley de Zimbabwe cuando la petición la haya presentado un país con el que se mantengan relaciones de reciprocidad. La extradición debe ser confirmada por un tribunal de justicia antes de extraditar al interesado para que sea juzgado o cumpla una condena. Los bienes de la persona extraditada que se hayan obtenido de forma delictiva se entregan también se entrega a la autoridad extranjera en el momento de la extradición. Por último, se puede apelar contra cualquier decisión al respecto ante el Tribunal Supremo de Zimbabwe.

Zimbabwe tiene un acuerdo de extradición con Mozambique, y, la Ley de extradición, mantiene relaciones de reciprocidad para los efectos de la extradición con los siguientes países:

Antigua y Barbuda	Lesotho
Australia	Malasia
Bahamas	Malawi
Bangladesh	Maldivas
Barbados	Malta
Belice	Mauricio
Bermuda	Montserrat
Botswana	Namibia
Brunei Darussalam	Nauru
Canadá	Nigeria
Chipre	Niue
Dominica	Nueva Zelanda
Fiji	Pakistán
Gambia	Papua Nueva Guinea
Ghana	Reino Unido
Gibraltar	Samoa Occidental
Granada	San Vicente y las Granadinas
Guyana	Santa Helena
Hong Kong	Santa Lucía
India	Seychelles
Isla de Man	Sierra Leona
Islas Caimán	Singapur
Islas Cook	Sudáfrica
Islas Malvinas	Swazilandia
Islas Salomón	Tonga
Islas Turcas y Caicos	Trinidad y Tabago
Islas Vírgenes Británicas	Tuvalu
Jamaica	Uganda
Jersey	Vanuatu
Kenya	Zambia
Kiribati	

3 e) Dado que Zimbabwe no es todavía parte en los convenios que se examinan, ninguno de los delitos a los que hacen referencia esos convenios son aún delitos por los que se pueda extraditar. No obstante, es posible extraditar por tales delitos aplicando la Ley de extradición.

5 f) Ley de Refugiados. En Zimbabwe, todos los solicitantes de asilo son examinados por el Comité de Refugiados antes de que se les pueda conceder la condición de refugiados. La función de ese Comité es verificar que los solicitantes de asilo no incumplen ningún convenio o acuerdo internacional. No se concede la condición de refugiado a ninguna persona que figure en la lista de personas buscadas por la Corte Internacional de Justicia o por algún otro órgano similar. Con la ayuda del ACNUR, se investigan los antecedentes de los solicitantes de asilo.

3 g) La extradición por delitos de terrorismo plantea un problema, porque la mayoría de los actos de terrorismo transnacionales se cometen por motivos políticos.

El artículo 15 de la Ley de extradición de Zimbabwe dispone que *“No se aprobará la extradición a un país con el que se mantengan relaciones de reciprocidad si se trata de un delito político, salvo en los siguientes casos:*

- i) Atentado contra la vida o la persona del Jefe de Estado o de Gobierno de cualquier país con el que se mantengan relaciones de reciprocidad;*
- ii) Secuestro de un vehículo, nave o aeronave, o*
- iii) Acto que constituya un delito comprendido en la Ley de genocidio (capítulo 9:20) o un atentado, conspiración o incitación a cometer tal delito”.*

Por lo tanto, es posible denegar la extradición por motivos políticos en algunos casos, si bien la posición oficial es favorable a no denegar la extradición de delinquentes internacionales.

#### **Párrafo 4**

- La Policía de la República de Zimbabwe es miembro de la Interpol, e ingresó en ese organismo para poder intercambiar información con los Estados miembros sobre terrorismo, redes ilícitas de tráfico de estupefacientes, blanqueo de dinero y tráfico de armas.
- En el plano regional, la Policía de la República de Zimbabwe es miembro de la SARPPCO.
- Uno de los principales objetivos de la SARPPCO es el intercambio de información entre los Estados miembros.
- Zimbabwe va a ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y su Protocolo.
- Zimbabwe estuvo representado por el Ministro del Interior en la Conferencia Ministerial Regional celebrada en Argel los días 29 y 30 de octubre de 2002.
- En la Conferencia se señaló que existen vínculos entre la delincuencia organizada transnacional, el narcotráfico, el blanqueo de dinero y el terrorismo.